

Santiago, veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 284.864-2023: a sus antecedentes.

Al escrito folio N° 318.934-2023: atendido el mérito de los antecedentes y alegaciones esgrimidos en la presentación, no ha lugar por improcedente.

Al escrito folio 5.772-2024: estese a lo resuelto.

**Vistos:**

En los autos Rol N° 29.870-2021 de esta Corte Suprema, el Ministro de Fuero señor Mario Carroza Espinosa, por sentencia de 23 de mayo de 2019, escrita a fojas 1.776, decidió:

I.- Que se condena a José Patricio Cruz Lorente y a Hugo César Acevedo Godoy, en su calidad de autores del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, perpetrado en esta ciudad en el mes de diciembre de 1988, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, a cada uno de ellos a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y al pago de las costas de la causa.

II.- Que se condena a Humberto Leiva Gutiérrez, en calidad de encubridor del delito de homicidio calificado de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, ocurridos el 20 de diciembre de 1988, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos



políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

Respecto de Leiva Gutiérrez, el fallo le sustituye la pena por libertad vigilada intensiva, con un plazo de intervención igual al de su condena.

En la parte civil, el fallo acoge con costas, las demandas civiles deducidas por los actores Luis Anselmo Rodríguez Solís, Lastenia del Carmen Rodríguez Solís, Manuel Tercero Rodríguez Solís, Ernestina Lidia Rodríguez Solís y Adrián Orlando Rodríguez Muñoz, respectivamente, condenando al Fisco de Chile a pagarles a título de indemnización de perjuicios por daño moral la suma de \$ 30.000.000, (treinta millones de pesos), a cada uno de los hermanos, Luis Anselmo, Lastenia del Carmen, Manuel Tercero y Ernestina Lidia, y \$ 15.000.000, (quince millones de pesos) a Adrián Orlando Rodríguez Muñoz, desestimándose la petición de los querellantes de mantener privado de libertad a los sentenciados, en el intertanto no se paguen las indemnizaciones.

Impugnada dicha sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que rola a fojas 2208, la revocó únicamente en cuanto por ella se condenó a Humberto Leiva Gutiérrez en calidad de encubridor del ilícito imputado, y en su lugar se decidió absolverlo del referido cargo, confirmándola en lo demás.

Contra ese último pronunciamiento, el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, el condenado José Patricio Cruz Lorente y el abogado de los querellantes Luis Anselmo, Lastenia del Carmen, Manuel Tercero y Ernestina Lidia, todos de apellidos Rodríguez Solís dedujeron recursos de casación en la forma y el fondo.



A su vez, el querellante Adrián Orlando Rodríguez Muñoz y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, interpusieron recursos de casación en el fondo.

Con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**I.- En lo tocante a la sección penal del fallo impugnado.**

**Respecto de los recursos de casación en la forma:**

**Primero:** Que el Programa de Derechos Humanos dedujo, en primer término, recurso de casación en la forma fundado en la causal novena del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación con lo dispuesto en los números 4 y 5 del artículo 500 del mismo cuerpo legal.

Señala que el tribunal de alzada no entrega un razonamiento al tenor de los antecedentes que sirvieron de prueba para efectos de tener por acreditado el conocimiento específico que le cabe a Leiva Gutiérrez como Director Nacional de la Central Nacional de Informaciones, prescindiendo de la declaración del encartado, sin señalar algún razonamiento que justifique tal decisión, atendido que puede discrepar de la calificación jurídica efectuada por el juez *a quo*, más no suprimir las consideraciones fácticas y luego, concluir categóricamente que lo único que sirvió para establecer la responsabilidad del acusado es su posición al interior del organismo.

Arguye que no basta con enunciar que se confirma el fallo, con aclaración de que suprimen determinados considerandos de la sentencia de primer grado, para cumplir con la suficiencia del estándar de fundamentación, pues cuando la



Corte afirma que suprime basamentos que contienen elementos de cargo, debe descartar los razonamientos del juez *a quo* y explicar en qué elementos probados en el juicio se basa para levantar su tesis de absolución en este caso.

Añade que en el presente juicio se logró establecer por la misma declaración del imputado que, como Director de la Central Nacional de Informaciones, se le comunicaba de los quehaceres de la organización incluidos aquellos que significaban la eliminación de opositores.

Por lo expuesto, solicita tener por interpuesto recurso de casación en la forma en contra del fallo de segunda instancia, que revocó la sentencia de primer grado.

**Segundo:** Que desde ya cabe destacar, que de una atenta lectura de del recurso de casación formal impetrado por el Programa de Derechos Humanos, explicitado en el razonamiento que antecede, se desprende que, sin perjuicio, que el arbitrio explica sus fundamentos y precisa la influencia que tienen en lo dispositivo de la sentencia los errores de derecho que denuncia, omite una mención esencial, cual es formular peticiones concretas al tribunal, vinculadas con tales alegaciones, lo que atenta contra la certeza y precisión que exige la naturaleza del recurso de casación. En efecto, el recurrente sólo ha solicitado a esta Corte, que se declare que la sentencia es nula en su integridad, sin pedir que se dicte una de reemplazo ni señalar cuáles son las peticiones sometidas a su consideración para el caso de accederse a su pretensión, cuestión que también infringe los requisitos que imponen la naturaleza de este recurso extraordinario.

En estas circunstancias, el arbitrio formal impetrado por el Programa de Derechos Humanos no puede prosperar.



**Tercero:** Que el condenado José Patricio Cruz Lorente dedujo recurso de casación en la forma fundado en el artículo 541 N° 11 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 500, del mismo cuerpo legal y artículos 161, 746, 766, 769 y 771 del Código de Procedimiento Civil, por haberse dictado con anterioridad sobreseimientos definitivos por aplicación de la prescripción de la acción penal.

Por ello solicitó se invalidara la sentencia y, acto continuó y sin nueva vista, pero separadamente, se dictara el fallo de reemplazo que corresponda a derecho y al mérito del proceso, con costas.

**Cuarto:** Que, el abogado defensor del encartado en la audiencia en que se procedió a la vista del recurso, se desistió expresamente de la causal que funda el recurso de nulidad formal, por lo que se omitirá pronunciamiento a su respecto.

**Respecto de los recursos de casación en el fondo:**

**Cuarto:** Que previo al análisis de los recursos deducidos, es conveniente recordar que en el motivo décimo sexto del fallo de primer grado, que fue confirmado por el tribunal de alzada, se tuvieron por establecidos los siguientes hechos:

*“1º.- Que la Central Nacional de Informaciones, organismo creado por el Gobierno Militar el día 13 de agosto de 1977, por Decreto Ley N°1878, ejecutaba a través de sus agentes persecuciones, detenciones, interrogatorios bajo tortura y ejecuciones, siendo responsables de numerosas muertes y desapariciones de opositores políticos;*

*2.- Que en ese contexto histórico, el día 20 de diciembre de 1988, en la calle Manuel Rodríguez frente al número 369 de la Comuna de Santiago, es*



*ejecutado el ciudadano Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, por agentes de ese organismo, pertenecientes a la Agrupación Azul, C. I, 2.1, que era parte de la Unidad Antisubversiva;*

*3.- Que en efecto, en dicha oportunidad , en horas de la noche, un equipo de la citada Agrupación , comandado por el agente de nombre supuesto Osear Hernández Santa María - identificado posteriormente como el Oficial de Ejército Krantz Johans Bauer Donoso, actualmente fallecido - acompañado del funcionario de Ejército, Teniente José Patricio Cruz Lorente y presuntamente un conductor , no identificado, tuvo un encuentro en ese lugar con la víctima Rodríguez Solís ( que veladamente y sin confirmar ha sido sindicado como informante o infiltrado del organismo de inteligencia);*

*4.- Que esta actividad operativa de la agrupación, se encontraba bajo el control y supervisión de la Unidad Antisubversiva, cuyo Jefe era el oficial de Ejército Hugo César Acevedo Godoy, que en esa fecha dependía del Jefe de la División Metropolitana, Enrique Leddy Arancibia, y del Director de la Central Nacional de Informaciones, Humberto Leiva Gutiérrez, el cual por mando le incumbía ser informado de todo lo que acontecía en la organización, como aconteció con esta operación;*

*5.- Que como resultado del encuentro, el agente de la CNI Cruz Lorente resulta con dos disparos en su cuerpo, uno en el abdomen y otro en un muslo, que lleva a que él y su compañero Krantz Bauer Donoso, alias "Osear Hernández Santa María", dispararan en contra de Rodríguez Salís sus armas de servicio y le ocasionaran la muerte por seis impactos de bala, provocándole traumatismo*



*facial, cervical, torácico, abdominal, raquimedular lumbar y de antebrazo izquierdo;*

*6.- Que con posterioridad a lo acontecido, llegaron hasta el sitio del suceso, los efectivos de la Central Nacional de Informaciones, luego los efectivos de Carabineros y finalmente, la Brigada de Homicidios, quienes constituyeron el procedimiento de rigor y enviaron los antecedentes al Juzgado Militar respectivo;*

*7.- Que la versión oficial , recogida por los funcionarios policiales de los agentes de la CNI, es que a la víctima se le solicita su identificación por resultar sus actitudes sospechosas, y éste reacciona sacando de sus vestimentas una pistola, que exige a uno de los agentes abalanzarse sobre él para reducirlo, pero que en el curso de la pugna la víctima dispara el y el agente recibe impactos de bala en el abdomen y en el muslo, lo que mueve la reacción de los agentes, quienes le disparan y Rodríguez Salís cae herido, abatido mortalmente.”*

**Quinto:** Que el Programa de Derechos Humanos interpuso recurso de casación en el fondo fundado en la causal establecida en el artículo 546 N° 7 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación al artículo 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 14, 15, 17, 53, 54, y 68 del Código Penal.

Expresa que la Corte de Apelaciones no señala fundamentos para absolver a Humberto Leiva Gutiérrez, no obstante que a la época del homicidio de la víctima, era el funcionario a cargo de la Central Nacional de Informaciones, con poderes para dirigir el trabajo interno, destinar a los agentes a grupos operativos y designar a los oficiales que los dirigían.

Por ello, estima que se infringen los numerales 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, pues el fallo descarta los antecedentes de cargo



en contra del acusado, e inmediatamente indica que la sola posición en el cargo de director no lo hace responsable de todas las conductas desplegadas por sus subordinados.

Señala que conforme a los hechos probados, no es posible exonerar de responsabilidad al Brigadier General Humberto Leiva en la medida que mantuvo conocimiento de las operaciones realizadas por sus subalternos, con plenos poderes de comunicación entre autoridades de la época, con despliegue de acciones posteriores, inclusive en orden a esconder a sus hombres de cualquier reproche judicial, y conociendo las acciones que realizaba la División Antisubversiva.

Concluye pidiendo, se invalide el fallo y, sin nueva vista y acto seguido, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se declare que se confirma en todas sus partes el fallo de primer grado, con declaración de que se condena a Humberto Leiva Gutiérrez como autor mediato del homicidio calificado de la víctima Guillermo Eugenio Rodríguez Solís.

**Sexto:** Que en lo referente a esta causal del recurso, baste señalar que las alegaciones del recurrente se relacionan con una disconformidad con el proceso valorativo que de los distintos medios de prueba rendidos en autos hicieron los jueces del grado, cuestión que reiteradamente esta Corte ha señalado se encuentra entregado exclusivamente a éstos.

En efecto, lo pretendido por el recurrente es que se efectúe una nueva valoración de los antecedentes probatorios, cuya conclusión correcta, a su juicio, es que se encuentra suficientemente acreditado que a Humberto Leiva Gutiérrez le correspondió la calidad de autor mediato en el delito de homicidio calificado





cometido en contra de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís; sin embargo, fue expresamente descartado en la sentencia de segundo grado, en sus fundamentos 12° y 13°, atendido que no se acreditó las conductas en que habría incurrido el acusado para configurar su participación en los hechos, desde que lo único que se le atribuye es la circunstancia de ostentar el cargo de Director de la Central Nacional de Informaciones, sin haberse precisado una relación más directa con el homicidio de la víctima o una intervención posterior a su acaecimiento.

Ahora bien, tal actividad de ponderación, como se señaló, resulta extraña a los fines de la casación en el fondo, razón por la que sólo cabe descartar las infracciones denunciadas, desde que todo su argumento, como se dijo, no se condice con la naturaleza de la vulneración que denuncia.

**Séptimo:** Que, por lo demás, debe tenerse en consideración para desestimar la supuesta vulneración de la norma reguladora de la prueba del artículo 488 N°s 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, que *“aunque se haya repetido muchas veces debe decirlo todavía el tribunal que el análisis de la prueba corresponde a los jueces de la instancia”...“este tribunal no puede llegar hasta la revisión de los hechos... no se produce la violación de las leyes reguladoras de la prueba cuando se impugna la apreciación estimativa y comparativa que los sentenciadores han hecho de los elementos probatorios.”* (Repertorio del Código de Procedimiento Penal, cit., T. III, pp. 421- 422).

Así las cosas, el recurrente no ha explicado -siendo su carga- cómo los jueces arribaron a la conclusión absoluta desconociendo los medios de prueba aportados, por lo que no puede decirse infringido el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal en los apartados citados.



**Octavo:** Que la defensa del acusado José Patricio Cruz Lorente interpuso recurso de casación en el fondo, fundado en primer lugar en la causal contemplada en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 476, 486 y 488 N° 1 y 2, primera parte del mismo cuerpo legal.

Explica que se ha producido una infracción a las leyes reguladoras de la prueba, por cuanto en ella, se ha estimado acreditado la concurrencia de las circunstancias de hecho para configurar la calificante de la alevosía, estableciendo que los agentes actuaron sobre seguro, por lo que el error de derecho consiste en haber calificado como asesinato por concurrir la circunstancia primera del N° 1 del artículo 391 del Código Penal, debiendo calificarse como homicidio simple, previsto en el artículo 391 N° 2 del mismo cuerpo legal.

Arguye que la conclusión fáctica de obrar sobre seguro se basa en tres hechos que afirma que se encontrarían probados mediante indicios, esto es, que se aseguró que no existiese reacción defensiva por parte de la víctima, para lo cual -junto con el coautor- lo habría acribillado; que previo a la llegada de Carabineros y de la Brigada de Homicidios se habría alterado el sitio del suceso; y la frialdad de los agentes para asegurar su acción homicida al asesinarle, con lo cual ésta acción se asemeja más a una ejecución que a un enfrentamiento.

Señala que para arribar a estas conclusiones se han violentado las leyes reguladoras de la prueba y, en especial, lo dispuesto en los artículos 476, 486 y 488 N° 1 y 2, primera parte, del Código de Procedimiento Penal, pues no existen indicios múltiples o basados en hechos probados, que permitan dar por establecido que el sitio del suceso fue alterado por el acusado, y tal afirmación se



basa únicamente en el informe suscrito por Luis Leyton González, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, médico criminalístico, que se encuentra desvirtuado por el Informe Pericial Médico Forense elaborado por Germán Tapia Coppa, funcionario del Servicio Médico Legal.

Hace presente que su representado no permaneció en el sitio del suceso, sino que es trasladado de inmediato al Hospital Militar de Santiago, como tampoco existen indicios múltiples o basados en hechos probados, que el acusado se hubiese “asegurado” que no existiese reacción defensiva por parte de la víctima, por el contrario se encuentra acreditado que la víctima se encontraba armada, pues se le encontró un arma calibre .22.

Manifiesta que no existen indicios múltiples o basados en hechos probados, que la actuación de los agentes hubiese sido con “frialidad”, pues, se encuentra acreditado que su representado -un oficial joven de sólo 25 años y hacía poco tiempo destinado a la Central Nacional de Informaciones- recibe dos disparos a quema ropa con un arma de bajo calibre (.22), resultando herido en su estómago y muslo izquierdo.

Agrega que el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal fue infringido en la sentencia impugnada, pues concluye aspectos fácticos diametralmente opuestos a los reseñados en el acta de constitución en el sitio del suceso del tribunal, en la que da cuenta que la víctima portaba un arma y un sobre con municiones, sin señalar la existencia de huellas sobre una alteración del sitio del suceso.

También expresa que respecto a los artículos 486 y 488 números 1 y 2 del Código de Enjuiciamiento, cabe hacer presente que en la sentencia impugnada, se



concluyen los tres hechos referidos, lo que es errado, pues para poder producir prueba los indicios deben basarse en hechos probados y no en otros indicios, por un lado, y a la vez deben ser múltiples, en circunstancias que los indicios existentes dan cuenta que la víctima se encontraba armada y que en dicho operativo resultó herido el acusado.

Agrega que respecto a la supuesta acreditación de la alteración del sitio del suceso, existe la contraposición de dos informes periciales, siendo a lo sumo un indicio de acuerdo al artículo 473 del Código de Procedimiento Penal, que por ser único resulta insuficiente para cumplir con el estándar del artículo 488 N° 2 primera parte del mismo cuerpo legal.

Como segunda causal invoca el artículo 546 N° 2 del Código de Procedimiento Penal, haciendo consistir el vicio en la errada calificación de los hechos como asesinato por alevosía, en lugar de homicidio simple.

Señala que no es posible sostener la existencia de tres circunstancias de hecho: “ánimo frío”, “aseguramiento de la víctima” y “alteración del sitio del suceso”, las que fueron la base para sostener el actuar sobre seguro por parte de los sentenciadores.

Agrega que en ninguna parte de la imputación consta que José Cruz haya sido el creador de la situación, sin que baste una mera afirmación subjetiva en virtud de la cual se pretenda condenarlo por el solo hecho de haber estado destinado a la Central Nacional de Informaciones y por la circunstancia que el autor de los hechos haya fallecido.

Concluye solicitando se acoja, declarando que la sentencia es nula, y se dicte, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, fallo que se crea



conforme a la ley y al mérito de los hechos, procediendo a modificar la pena impuesta al encartado.

**Noveno:** Que, la sentencia de primer grado estableció los hechos en el motivo décimo sexto, confirmada por el tribunal de alzada, los que se reprodujeron en el fundamento cuarto del presente fallo, que fueron calificados como un delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, por concurrir la circunstancia primera de alevosía, en grado de consumado, acaecido el 20 de diciembre de 1988, considerando para ello que los agentes actuaron sobre seguro, por cuanto no se aprecia la intención de detener a la víctima, procediendo a alterar el sitio del suceso para efectos que los policías que llegaran a analizar el lugar, adquirieran el convencimiento que, previo a la muerte de la víctima, ocurrió un enfrentamiento, revelando un ánimo frío al dispararle al menos en seis ocasiones, que son las heridas que presenta el cuerpo del occiso.

**Décimo:** Que en tales acontecimientos no es posible establecer la presencia de un homicidio alevoso, por la especial concurrencia de la modalidad de ejecución de obrar sobre seguro.

En efecto, la jurisprudencia y la doctrina entienden que la alevosía constituye un modo o forma de ejecución del delito que requiere por parte del agente el ocultamiento de su intención criminal, para ejecutar el homicidio con seguridad, sin riesgos para él, procediendo con cautela y sobre seguro, en forma páfida e insidiosa, atacando de improviso, a traición o por sorpresa, cuando la víctima se halle desprevenida o indefensa, siendo indispensable que esta situación de ventaja haya sido buscada, procurada o aprovechada por el agresor.



También se ha sostenido que el actuar sobre seguro es la acechanza, emboscada, o el agguato en el Código Penal Italiano, que deviene del español aguaitar, aun cuando entre nosotros es más amplio, pues se comprende también los casos en que se ocultan los medios y no necesariamente la persona del hechor. La nota de reprobación moral surge cuando las condiciones de aseguramiento han sido especialmente buscadas o procuradas por el hechor, lo que revela también la existencia del ánimo alevoso (Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile, año 1998 T. III, páginas 60 y 61).

Obrar sobre seguro importa crear o aprovechar condiciones fácticas que permitan al agente descartar todo riesgo para su persona en la comisión del hecho. Hay dos modalidades de obrar sobre seguro, ambas constitutivas de alevosía. El agente puede crear una situación especialmente destinada a dar seguridad a su acción o a marginar todo riesgo para su persona. Puede ocurrir también que el agente simplemente aproveche las condiciones concretas en que se encuentre la víctima y que le ofrezcan seguridad en su acción, no preparadas o determinadas por él. (Mario Garrido, El Homicidio y sus Figuras Penales, Editorial Jurídica Conosur, segunda edición, año 1994, páginas 157 y 158).

**Undécimo:** Que las circunstancias antes referidas no se encuentran presentes en los hechos en examen, por cuanto se estableció que la patrulla de la Central Nacional de Informaciones tuvo un encuentro con la víctima, resultando herido uno de los agentes por dos disparos efectuados en su contra, motivo por el cual, tanto él y su compañero, efectúan seis disparos a Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, quien resulta con varias heridas que le provocan su muerte.



Los hechos descritos no permiten establecer la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos que exige la calificante de alevosía en este delito, pues ellos no describen las dos posibilidades en que podría configurarse según lo que se viene explicando.

**Duodécimo:** Que, en consecuencia, la sentencia adolece del vicio de nulidad contemplado en el ordinal segundo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, pues haciendo una calificación equivocada del delito se aplicó la pena en conformidad a esa calificación, desde que los hechos declarados como probados satisfacen las exigencias del tipo penal del artículo 391 N° 2, del Código Penal, y no de su numeral 1°, circunstancia primera, como erróneamente se señaló.

Por las motivaciones expresadas, se acogerá el recurso interpuesto.

**Décimo tercero:** Que el abogado del querellante Adrián Orlando Rodríguez Muñoz dedujo recurso de casación en el fondo fundado en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 11 N° 6, 12 N° 8, 14 N° 3 y 391 N° 1 del Código Penal.

Expresa que un primer error se configura en la determinación de la pena de los condenados, al considera concurrente en su favor la atenuante establecida en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior, atendido que los acusados eran parte de un organismo de inteligencia estatal, encargado de la represión de los disidentes del régimen gobernante, estando autorizados a llevar a cabo detenciones ilegales, torturas de toda clase y asesinatos.



Señala que el segundo error se configura en la determinación de la participación de Humberto Leiva Gutiérrez, pues el tribunal niega que le haya cabido algún tipo de participación, no obstante que el encartado reconoció que el día de los hechos se encontraba cumpliendo labores en su calidad de Director de la Central Nacional de Informaciones y Jefe Directo de la Unidad Antisubversiva, así como que todas las operaciones que se realizaban debían serle informadas.

Expresa que no queda sino concluir que Humberto Leiva Gutiérrez tuvo participación en la comisión del delito investigado y establecido en autos, pues tomó parte en la ejecución del hecho. Lo anterior, por cuanto omitió el deber de cuidado que le correspondía por ser el funcionario de mayor rango y por haber estado -como el mismo reconoció- cumpliendo labores en su calidad de Director de la Central Nacional de Informaciones y Jefe Directo de la Unidad Antisubversiva.

Agrega que esta responsabilidad es en grado de encubridor, al haber realizado una colaboración posterior a la ocurrencia de los hechos, esto es, ayudando a encubrir lo acontecido, permitiendo el ocultamiento o la inutilización de los efectos del crimen, e impedir su descubrimiento y también suministrándoles a los culpables los auxilios o noticias para que éstos pudiesen guardarse, precaverse o salvarse, en los términos del artículo 17 N° 2 y 4 del Código Penal.

Añade que respecto a la circunstancia agravante del artículo 12 N° 8 del Código Penal, debió estimarse que concurría en la especie por cuanto los agentes de la Central Nacional de Informaciones, como servicio gubernamental, califican como funcionarios públicos, contando con acceso a los implementos y





armamentos que el Estado entregaba, debiendo, en consecuencia, agravarse la pena.

Concluye pidiendo se anule la sentencia que absuelve de responsabilidad al acusado Humberto Leiva Gutiérrez por estimar que no le cupo ningún grado de participación en el delito de homicidio calificado y que lo condene en su calidad de encubridor, sumándole la agravante contenida en el artículo 12 N° 8 del Código Penal; y que no concurre la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, respecto a todos los condenados y, en consecuencia, se les aplique las penas correspondientes.

**Décimo cuarto:** Que cabe analizar si las vulneraciones legales que el recurrente denuncia, para el evento de haberse éstas acreditado, habrían gravitado en forma sustancial en la determinación del quantum de la sanción que debió ser aplicada a los sentenciados. Al efecto ha de consignarse que la pena asignada por la ley al delito, descrita en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal, a la época de ocurrencia de los hechos era la de presidio mayor en su grado medio a muerte, esto es, de diez años y un día a muerte. Pues bien, para el caso de autos, concurriendo una circunstancia atenuante, como lo estiman los jueces, bien pudieron aplicar la pena de la forma que lo hicieron; mientras que por el contrario, si no existieran circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal que considerar, conforme lo dispone el artículo 68 inciso primero del Código Penal, los sentenciadores están facultados para recorrer la pena asignada al ilícito en toda su extensión, vale decir, igualmente estarían en aptitud de sancionar de la manera como lo hicieron, de suerte que aún si se estimara



procedente acoger el recurso, y considerar que no concurre la atenuante, ello no influiría en lo dispositivo de la sentencia, debiendo por tanto ser éste rechazado.

**Décimo quinto:** Que, en lo que atañe a la atribución de responsabilidad del acusado Humberto Leiva Gutiérrez, en calidad de encubridor en el delito de homicidio calificado, sosteniendo genéricamente que hubo una errónea aplicación del derecho al haberse absuelto al encartado, infringiéndose entre otras disposiciones, el artículo 17 N° 2 y 4 del Código Penal, es menester asentar que como es de sobra conocido, el recurso de casación en el fondo constituye un modo de impugnación dotado por la ley de una serie de formalidades que le dan el carácter de derecho estricto, con lo cual se impone a quienes lo deducen que en su formulación precisen con claridad en qué consiste la aplicación errónea de la ley penal, de tal modo que pueda exponerse con exactitud la infracción de ley que le atribuyen al fallo atacado y cómo ese vicio constituye alguna o algunas de las causales taxativas que designa el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Esta exigencia impide que pueda proponerse por el recurrente una atribución de responsabilidad fundado en hipótesis alternativas, como es señalar que la participación que le corresponde al encartado es la de encubridor conforme al artículo 17 N° 2 y 4, sin describir exactamente las conductas que se le atribuye, salvo la de ser Director de la Central Nacional de Informaciones, limitándose a reproducir el contenido de esos numerales, ya que al plantearse de esta forma provoca que el arbitrio carezca de la certeza y determinación del vicio sustancial que requiere un recurso de derecho estricto como acontece con el arbitrio de casación, imponiéndole al fallador de manera improcedente establecer el defecto que pudiera adolecer el fallo cuestionado, lo que es obligación del impugnante.



**Décimo sexto:** Que, en lo referente a la atribución de responsabilidad a Leiva Gutiérrez fundado en que omitió el deber de cuidado que le correspondía por ser el funcionario de mayor rango y por haber estado cumpliendo labores en su calidad de Director de la Central Nacional de Informaciones y Jefe Directo de la Unidad Antisubversiva, no fue alegado por el recurrente al momento de adherir a la acusación, de manera que el fallo no se ha extendido acerca de ellas, por lo que tratándose de una alegación nueva, solo cabe descartar el supuesto error de derecho que recaería sobre un punto respecto del cual no ha habido pronunciamiento.

**Décimo séptimo:** Que en lo referente a la configuración de la circunstancia agravante esgrimida por el recurrente supone que el agente ha puesto la función pública al servicio de sus propios y particulares fines (SCS 4240-2014), lo que en este caso no se ha demostrado. Así, además, lo ha considerado la doctrina nacional al señalar que “prevalerse ... es un concepto que equivale a “abusar”, esto es, quiere decir *“servirse, aprovechar, valerse del carácter público para ejecutar el delito... también se prevale quien usa de las ventajas otorgadas por su función pública para asegurar mejor la impunidad u obtener más provecho de la perpetración del hecho punible”* (entre otros, Cury, Derecho Penal, Parte General, Ediciones Universidad Católica de Chile, página 503). Coherente con esta inteligencia de la disposición, la misma doctrina ha situado esta circunstancia en la categoría de agravantes subjetivas al descansar sobre una característica personal del agente que envuelve un elemento de naturaleza psíquica, conceptualización que da cuenta que los jueces del grado no han cometido yerro alguno al declarar que no concurre.



**Décimo octavo:** Que por estas consideraciones el recurso de casación en el fondo formalizado por el querellante será desestimado.

**Décimo noveno:** Que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos deduce recurso de nulidad sustancial fundado en la causal establecida en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 488 N° 1 y 2 del mismo cuerpo legal y los artículos 7, 14, 17 N° 2 y 4, y 391, todos del Código Penal.

Expresa que la errónea aplicación del derecho por parte del tribunal de segunda instancia se produjo al absolver al acusado Leiva Gutiérrez de los cargos formulados en su contra, no obstante que a su respecto existen en la causa múltiples hechos reales y probados, que por cumplir con los otros requisitos previstos en la norma antes referida, constituyen presunciones judiciales que permiten tener por acreditada su participación en el delito por el que fue acusado, tal como estableció la sentencia de primera instancia.

Señala que los elementos de juicio allegados a la investigación, permiten tener por acreditados que Leiva Gutiérrez asumió en el mes de noviembre de 1988 como Director de la Central Nacional de Informaciones, manteniéndose en dicho cargo hasta el mes de mayo de 1989, como también que los miembros de la Central Nacional de Informaciones bajo su mando, por el carácter jerárquico de dicha institución, asesinaron a Guillermo Eugenio Rodríguez Solís y de forma posterior, pero previamente a la llegada de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, miembros de esa Central arribaron al lugar de los hechos alterando el sitio del suceso a efectos de simular un enfrentamiento con la víctima de autos y, como consecuencia de ello, ocultar la ejecución de la que fue



objeto; todo lo señalado como actos posteriores a la ejecución de la víctima fueron realizados con el conocimiento del encartado.

Arguye que hay un reconocimiento expreso del acusado que a la época de los hechos ostentaba el cargo de Director de la Central Nacional de Informaciones, así como que el homicidio fue realizado por agentes de ese organismo, quienes manipularon el sitio donde ocurrieron los hechos.

Por lo expuesto y considerando los elementos probatorios consignados en la sentencia de primera instancia, permiten concluir, por vía de presunciones judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que Leiva Gutiérrez, en su calidad de Director de la Central Nacional de Informaciones y teniendo, por ello, bajo su dependencia a los autores del asesinato investigado en autos, participó de los actos positivos tendientes a ocultar la ejecución de la víctima, interviniendo, por consiguiente, en calidad de encubridor, conforme la hipótesis normativa prevista en el artículo 17 N° 2 y 4 del Código Penal, en el delito consumado de homicidio calificado de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís.

Concluye solicitando se acoja, se declare que la sentencia recurrida es nula, y, acto seguido y sin nueva vista, dicte fallo de reemplazo por el cual se condene a Humberto Leiva Gutiérrez como encubridor del delito consumado de homicidio calificado, previsto en el artículo 391, N° 1, circunstancia primera del Código Penal, vigente a la época de los hechos, cometido en la persona de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, estableciendo la máxima pena establecida en la ley, más accesorias legales y costas de la causa.



**Vigésimo:** Que interpone recurso de nulidad sustancial la abogada señora Javiera Bobadilla Orellana en representación de los querellantes Luis Anselmo, Lastenia del Carmen, Manuel Tercero y Ernestina Lidia, todos de apellido Rodríguez Solís, fundado en la causal contemplada en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal y artículos 7, 14, 17 N° 2 y 4, y 391, todos del Código Penal.

Expresa que hubo una errónea aplicación del derecho por parte del tribunal de segunda instancia al absolver al acusado Leiva Gutiérrez, infringiendo el artículo 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, pues en la causa existen múltiples hechos reales y probados, que por cumplir con los otros requisitos previstos en la norma referida, constituyen presunciones judiciales que permiten tener por acreditada su participación en el delito por el que fue acusado, tal como estableció la sentencia de primera instancia.

Señala que de los antecedentes incorporados en el proceso puede establecerse que Leiva Gutiérrez asumió en el mes de noviembre de 1988 como Director de la Central Nacional de Informaciones, manteniéndose en dicho cargo hasta el mes de mayo de 1989; que miembros de dicha institución, bajo su mando por el carácter jerárquico de dicha institución, asesinaron a Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, y en forma previa a la llegada de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, miembros de la mencionada Central arribaron al lugar de los hechos alterando el sitio del suceso a efectos de simular un enfrentamiento con la víctima, actos que fueron ejecutados con conocimiento del encartado.



Añade que respecto al conocimiento por parte de Humberto Leiva Gutiérrez, cabe señalar que el propio encausado en sus declaraciones reconoce haber sido informado de ese procedimiento y, en este sentido, necesariamente se debe incorporar el hecho que la Central Nacional de Informaciones correspondía a una institución jerárquica que funcionó como organismo de persecución, secuestro, tortura y asesinato de opositores políticos de la dictadura cívico militar y, así las cosas, un procedimiento tendiente a alterar el sitio del suceso para simular un enfrentamiento no podría llevarse a cabo sin el beneplácito o a lo menos conocimiento de su máxima autoridad, esto es, su Director.

Indica que todos los elementos probatorios permiten concluir, por vía de presunciones judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que Leiva Gutiérrez, en su calidad de Director de la Central Nacional de Informaciones y teniendo, por ello, bajo su dependencia a los autores del asesinato investigado en autos, participó de los actos positivos tendientes a ocultar la ejecución de la víctima de autos, interviniendo, por consiguiente, en calidad de encubridor, conforme la hipótesis normativa prevista en el artículo 17 N° 2 y 4 del Código Penal.

Finaliza solicitando se declare que la sentencia recurrida es nula, y, acto seguido y sin nueva vista, dicte sentencia de reemplazo por la cual se condene a Humberto Leiva Gutiérrez como encubridor del delito consumado de homicidio calificado, previsto en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal vigente a la época de los hechos, cometido en la persona de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, estableciendo la máxima pena contemplada en la ley, más accesorias legales y costas de la causa.



**Vigésimo primero:** Que, en cuanto al motivo de reproche de ambos recursos, es del caso subrayar que el recurso de casación en el fondo, por su calidad de medio de impugnación extraordinario, formal y de derecho estricto, está sometida a un conjunto de reglas absolutas de las que no es posible prescindir, ya que lo contrario llevaría a desnaturalizar su fisonomía jurídica y la finalidad perseguida por la ley al incorporarlo a su normativa.

Entre esas exigencias de carácter ineludible, se hallan las consignadas en el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, por la remisión que a ese precepto hace el artículo 535 de su homónimo procesal penal, en orden a explicar específicamente en qué consisten el o los yerros de derecho de que adolece la sentencia recurrida y señalar de qué modo ese o esos equívocos influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

**Vigésimo segundo:** Que, bajo este prisma, nuestro ordenamiento procesal coloca al recurso en la necesidad de determinar el alcance o sentido de la ley y explicar la forma en que ha sido violentada. En otras palabras, es indispensable un verdadero enjuiciamiento de las disposiciones legales conculcadas a fin de demostrar que han sido incorrectamente aplicadas, en términos tales que estos jurisdicentes queden en condiciones de abocarse de una manera perfectamente concreta y definida al análisis de los problemas jurídicos que se someten a su decisión, porque de otro modo este recurso se convertiría en una nueva instancia del pleito que el legislador expresamente quiso evitar, conclusión que resulta, tanto del claro tenor de los cánones que lo gobiernan, cuanto de la historia fidedigna del establecimiento de la ley (Waldo Ortúzar Latapiat: *“Las Causales del Recurso de Casación en el Fondo en Materia Penal”*, Editorial Jurídica de Chile,





Santiago de Chile, año mil novecientos cincuenta y ocho, N° 5, página 13, nota 1; y Santiago Lazo: *“Los Códigos Chilenos Anotados, Código de Procedimiento Civil”*, Poblete Cruzat Hnos. Editores, Santiago de Chile, año mil novecientos dieciocho, página 675).

**Vigésimo tercero:** Que, de una simple lectura de los libelos, se aprecia que los recurrentes, en realidad, aunque no lo dicen explícitamente, pretenden cuestionar la ponderación que se hizo de los elementos incriminatorios reunidos en el curso de la investigación, en circunstancias que se trata de una materia que escapa del control de este tribunal, desde que le está vedado entrar a examinar y aquilatar los instrumentos probatorios mismos que ya han sido justipreciados por los sentenciadores del grado en el ejercicio de sus atribuciones propias, así como revisar las conclusiones a que ellos han llegado, ya que eso importaría desnaturalizar el arbitrio en estudio, que puede fundarse exclusivamente en cuestiones de derecho.

Es así como, en nuestro sistema procesal penal, los jueces de la instancia están facultados para evaluar, con la más amplia libertad, el contenido intrínseco de los antecedentes probatorios que con eficacia legal se acumulan en la litis con el objeto de acreditar los hechos determinantes de la existencia del delito, de la responsabilidad del procesado y de las circunstancias que la atenúen o la eliminen y, por lo mismo, para darles o negarles valor.

El raciocinio que conduce al juez a considerar probados o no tales hechos con esos medios, como se dijo, escapa naturalmente del control del tribunal de casación. Así, Manuel Egidio Ballesteros expresa: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que*



*debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones” (“Proyecto de Código de Procedimiento Penal para la República de Chile”, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, año mil ochocientos noventa y siete, nota al artículo 466 [actual 456], páginas 254 y 255).*

Por lo razonado, ambos arbitrios deben ser desestimados.

## **II.- En lo tocante a la sección civil del fallo impugnado.**

**Vigésimo cuarto:** Que el abogado de los querellantes y demandantes civiles Luis Anselmo, Lastenia del Carmen, Manuel Tercero y Ernestina Lidia, todos de apellido Rodríguez Solís, interpone recurso de casación en la forma fundado en la causal contemplada en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que en la demanda interpuesta se solicitó que el Fisco de Chile pague sendas inserciones en un diario de la ciudad de Santiago, en que se haga público lo sustancial de lo que se falle penalmente en estos autos, como un reconocimiento público que Guillermo Eugenio Rodríguez Solís fue víctima de un delito de lesa humanidad.

La sentencia no se hizo cargo de tal petición, por lo que no ha sido extendida en la forma prescrita por la ley, pues omite una acción de reparación hecha valer en juicio por sus representados, vulnerando abiertamente lo dispuesto por el artículo 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, inhibe a los demandantes civiles de obtener una reparación integral por el asesinato de su



hermano a manos de agentes estatales, en el contexto de un crimen de lesa humanidad.

Finaliza pidiendo se haga lugar al recurso y se anule la sentencia recurrida, dictando, acto continuo y sin nueva vista pero separadamente, la sentencia de reemplazo por la que se pronuncie sobre la petición de reconocimiento público de que el hermano de sus representados fue víctima de un delito de lesa humanidad y, en definitiva, se condené, además, al Fisco de Chile a pagar sendas inserciones en un diario de la ciudad de Santiago, en que se haga público lo sustancial de lo que se falle penalmente en estos autos.

**Vigésimo quinto:** Que el motivo de nulidad formal se ha incoado fundado en la causal contemplada en el numeral 9° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 170 N° 6 del mismo cuerpo de normas, esto es, la ausencia de decisión respecto de la reparación consistente en la publicación en un diario de un extracto de la sentencia, en atención a que el fallo impugnado no se pronuncia sobre la procedencia de esta parte de la indemnización, estableciendo únicamente una suma de dinero para este fin.

Sobre el particular, cabe tener presente que de la lectura del arbitrio en estudio, aparece de manifiesto que lo impugnado es precisamente lo decidido por los juzgadores de la instancia, en particular los razonamientos tenidos en vista para acoger la acción civil tendiente a la reparación de los actores por los sufrimientos ocasionados por la acción de agentes del Estado en contra de su familiar, decidiendo los sentenciadores que aquel resarcimiento se satisface con la suma de dinero que se determinó respecto de los demandantes, sin que logre divisarse, del análisis del fallo en revisión, alguna omisión respecto de las



alegaciones planteadas por ésta, lo que descarta la existencia del vicio denunciado y conduce necesariamente a su rechazo.

### **III.- Casación de oficio**

**Vigésimo sexto:** Que no obstante no haber recurrido de casación en el fondo el sentenciado Hugo César Acevedo Godoy, según lo previene el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte actuará igualmente de oficio para corregir la incorrecta aplicación de la ley que se ha pesquisado durante el examen del arbitrio impetrado por el condenado José Patricio Cruz Lorente.

En efecto, los sentenciadores calificaron los hechos como constitutivos del delito de homicidio calificado sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal, estimando que concurría la alevosía, y conforme a ello, determinaron la pena que debía imponerse a los acusados.

Sin embargo, tal como se expresó en los basamentos décimo a duodécimo de la presente sentencia, en los hechos establecidos no es posible establecer la presencia de un homicidio alevoso, por la especial concurrencia de la modalidad de ejecución de obrar sobre seguro, pues ello importa crear o aprovechar condiciones fácticas que permitan al agente descartar todo riesgo para su persona en la comisión del hecho, lo que no fue establecido, al asentarse por los sentenciadores que la patrulla de la Central Nacional de Informaciones tuvo un encuentro con la víctima, resultando herido el agente José Cruz Lorente por dos disparos efectuados en su contra, lo que motivó que tanto éste como su compañero efectuaran seis disparos a Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, quien resulta con varias heridas que le provocan su muerte.



**Vigésimo séptimo:** Que, como queda en evidencia, al haber estimado que los hechos constituían el delito de homicidio calificado por concurrir la calificante de la alevosía, teniendo únicamente las circunstancias que se alteró el sitio del suceso y que los agentes efectuaron al menos seis disparos en contra de la víctima, se ha infringido lo previsto en el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal, desde que, del mérito de los hechos establecidos por la sentencia de primera instancia, los que no fueron modificados por el tribunal de alzada, no ha podido acreditarse que los funcionarios de la Central Nacional de Investigaciones hayan actuado sobre seguro, esto es, que hayan creado o se hubieran aprovechado de condiciones que les hubieran permitido descartar todo riesgo para sus personas.

**Vigésimo octavo:** Que, en consecuencia, se invalidará de oficio la sentencia de segundo grado, sólo en cuanto condena a este sentenciado como autor del delito de homicidio calificado perpetrado en contra de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, por haberse infringido de esta manera el artículo 391 N° 1, circunstancia primera del Código Penal.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen los artículos 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal; 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**1.-** Que **se tiene por desistido** el recurso de casación en la forma deducido por la defensa de José Patricio Cruz Lorente, contra la sentencia de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, escrita a fojas 2.208 y siguientes.

**2.-** Que **se rechazan** los recursos de casación en la forma, formalizados por el Programa de Derechos Humanos y la abogada señora Javiera Bobadilla



Orellana, en representación de los querellantes Luis Anselmo, Lastenia del Carmen, Manuel Tercero y Ernestina Lidia, todos de apellidos Rodríguez Solís, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

**3.-** Que **se rechazan** los recursos de casación en el fondo interpuestos por el Programa de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el abogado señor Pedro Contreras Herrera, en representación de Adrián Orlando Rodríguez Muñoz, y la abogada señora Javiera Bobadilla Orellana, en representación de los querellantes Luis Anselmo, Lastenia del Carmen, Manuel Tercero y Ernestina Lidia, todos de apellidos Rodríguez Solís, contra la mencionada sentencia.

**4.-** Que **se acoge parcialmente** el recurso de nulidad sustancial interpuesto por el abogado del condenado José Patricio Cruz Lorente, respecto del pronunciamiento antes individualizado, solo en cuanto a la calificación del delito de homicidio, anulándose dicha sección del fallo, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo al efecto.

**5.-** Que **se invalida de oficio** referida sentencia, sólo en su aspecto penal en relación al sentenciado Hugo César Acevedo Godoy, en lo referente a la calificación jurídica de los hechos, y, como consecuencia de ello, la determinación de la pena que le es aplicable, la que por consiguiente es nula en esa parte y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

**Acordada con los votos en contra de los Ministros señores Brito y Llanos**, quienes fueron de la opinión de acoger el recurso de casación en la forma deducido por los querellantes Luis Anselmo, Lastenia del Carmen, Manuel Tercero



y Ernestina Lidia, todos de apellidos Rodríguez Solís en contra de la sentencia que no hizo lugar a la reparación consistente en la inserción en un diario de la ciudad de Santiago de las partes esenciales de la sección penal del fallo, en virtud de las siguientes consideraciones:

1° Que en relación a esta parte civil de la demanda, debemos tener presente la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147, de 16 de diciembre de 2005, y que lleva por título “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” que en el principio IX N° 22 *“La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;*

*c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;*

*d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;*

*g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas”;*



Asimismo en el número 23 se indica que *“Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención: e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad”*.

2° Que, la sentencia recurrida incurre en la omisión de pronunciarse sobre la petición de publicar un extracto de la parte penal de la sentencia, conforme a lo expresado en la demanda, pues únicamente se pronuncia sobre la procedencia de la indemnización pecuniaria solicitada, regulando su monto, sin referirse a esa parte de la reparación requerida en el libelo del actor.

3° Que todo lo expuesto evidencia el error de derecho en que incurre la sentencia en examen, pues omite pronunciarse sobre una de las formas de reparación solicitadas en la demanda de los actores mencionados, yerro que ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo, pues impidió que el tribunal se pronunciara sobre todas las pretensiones procesales de fondo contenidas en la demanda deducida contra el Fisco de Chile y, por consiguiente, establecer la reparación íntegra de los actores.

**Acordada con los votos en contra de los Ministros señores Brito y Llanos**, en lo que se refiere al rechazo de los recursos de casación en el fondo interpuestos por el Programa de Derechos Humanos, el abogado del querellante Adrián Orlando Rodríguez Muñoz, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la abogada de los querellantes Luis Anselmo, Lastenía del Carmen,





Manuel Tercero y Ernestina Lidia, todos de apellidos Rodríguez Solís, en contra de la sentencia recurrida que absuelve Humberto Leiva Gutierrez de su responsabilidad de ser encubridor o autor del delito de homicidio de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, en virtud de las siguientes consideraciones:

**1º)** Que, en un primer orden, hay ciertos supuestos en que la imputación de la conducta de una persona puede hacerse directamente al tipo penal respectivo, pero no por su realización inmediata, sino por haberlo realizado mediante otro, que ha sido utilizado como instrumento de su obrar. Son los casos de la llamada autoría mediata, que entre nosotros se encuentra ya mayoritariamente aceptada como categoría independiente de la inducción (que corresponde sólo a una forma de participación criminal en el hecho de otro).

Luego, a efectos de aplicación de la ley, no hay diferencias en el nivel de responsabilidad del autor inmediato con el del mediato: ambos son autores, esto es, realizan el hecho punible, mediante una conducta directamente subsumible en el tipo penal. La diferencia radica únicamente en que el autor inmediato realiza la acción típica personalmente, mientras el mediato hace ejecutar el hecho mediante otro (Politoff, S., Matus, J., Ramírez, M., Lecciones de Derecho Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, 2004, página 402);

**2º)** Que, entre los casos de autoría mediata se incluye la dirección del intermediario ("instrumento doloso") a través de un aparato organizado de poder.

El factor decisivo que funda esta autoría es la naturaleza absolutamente fungible o intercambiable del ejecutor quien, aunque actúe de manera libre y consciente, con plena culpabilidad, es para el individuo de atrás simplemente una persona anónima y sustituible a voluntad. Ellos serían ruedecillas en el



funcionamiento del aparato, sin que importe la persona individual del ejecutor (Roxin, C. Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. Cuello, J. y Serrano, J. (trad.), Marcial Pons, 2000, páginas 271-273).

La situación en examen se daría, paradigmáticamente, en los crímenes dispuestos por los aparatos de un Estado no democrático (Cury, E. “Artículos 14 a 17”, en Politoff, S., y Ortiz, L. (dir.), Texto y Comentario del Código Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, 2009, página 243);

**3°)** Que en el estado actual de la historiografía nacional, ratificada por innumerables investigaciones y sentencias judiciales, es un hecho público y notorio —que, por tanto, dispensa de probarlo—, que en nuestro país, desde el 11 de septiembre de 1973 y por varios años después, diversos organismos e instituciones estatales, estuvieron al servicio, o actuaron como parte, brazos o auxiliares, de una estructura destinada a la represión generalizada de miles de compatriotas, principalmente por su pensamiento político adverso al régimen militar imperante, pero también por diversas otras incomprensibles razones. Sin perjuicio de lo dicho, la existencia de esta política generalizada de represión fue desarrollada en la sentencia de primer grado, no alterado en alzada, con ocasión de la calificación de los hechos como crimen de lesa humanidad;

**4°)** Que dichos organismos e instituciones estatales a los que antes se ha hecho mención, dada su presencia en todo el país, permitían a través de sus agentes, concretar a nivel local, esa política general de represión en personas de carne y hueso, contribuyendo en su identificación como opositores al régimen, ubicación, detención, tortura y muerte, según el caso;



**5º)** Que uno de los organismos a los cuales le correspondió la realización de esa política general fue precisamente a la Central Nacional de Informaciones.

En efecto, la muerte de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, ocurre en las postrimerías del régimen militar, existiendo aun organismos con los fines descritos en el basamento anterior;

**6º)** Que, en el caso sub iudice, ejecutar a nivel nacional esta política general de represión requirió designar un contingente fijo o rotativo de agentes de las respectivas unidades para su cumplimiento, asignarles un encargado o responsable directo de su operación, y dotarlos de medios materiales para la detención, traslado y atentados contra las víctimas. Todo lo anterior, requería, huelga explicar, la intervención y aprobación de los jefes o superiores de la unidad policial en examen;

**7º)** Que, empero, mucho más relevante y determinante para la real y efectiva ejecución de esa política general de represión, era asegurar a los agentes ejecutores, que los delitos que se cometieren en el cumplimiento del encargo, no serían “realmente” investigados ni sancionados, ni administrativa ni penalmente, precisamente porque éstos constituirían una manifestación y materialización de dicha política, de la que se ha hecho parte la institución a la que pertenecen y, en particular, la unidad que integran. En ese orden de ideas, en una institución jerarquizada y militarizada como la Central Nacional de Informaciones, el agente que se encuentra en el último peldaño del escalafón, únicamente actuará para cumplir esa política general, más aún si involucra la comisión de graves delitos, si la misma es ratificada y refrendada, expresa o tácitamente, por sus superiores



directos —los jefes de la unidad respectiva o de toda la organización—, única garantía de que luego no serán perseguidos por su ejecución.

Con ese proceder, conviene despejar, los jefes de las unidades y del organismo no sólo comunican o transmiten una orden que proviene de muy arriba en la estructura burocrática, sino que la hacen propia y, por ende, el agente que la desobedece, no sólo se subleva frente al lejano y difuso jerarca que desde las oficinas centrales de la institución distribuye las infames instrucciones generales, con improbables concretas consecuencias adversas, sino desafía directamente al cercano jefe de su unidad, exponiéndose a claras e inminentes represalias;

**8°)** Que, en este contexto, contrario a lo que cree la defensa de Leiva Gutiérrez, la imputación que se realiza al jefe de la Central Nacional de Informaciones, no se edifica en sus omisiones, pasividad, desconocimiento o inactividad, sino que aquí se observa responsabilidad por una conducta activa o positiva, esto es, la implementación de una política nacional de represión, para lo cual, como ya se reseñó, se destina un grupo de personas a cargo de uno o más agentes, se permite el uso de vehículos y armas a disposición de la unidad policial respectiva para ese efecto, y se supervisa diariamente su ejecución mediante los reportes diarios;

**9°)** Que las consideraciones precedentes conducen a calificar la conducta del Director de la Central Nacional de Informaciones, a la época de los hechos, como autoría mediata por dirección del instrumento doloso a través de un aparato organizado de poder, pues autor mediato no solo es el jefe máximo de una organización criminal, sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva con poder de mando autónomo, pudiendo ser autor incluso



cuando él actúa por encargo de una instancia superior, formándose así una cadena de autores mediatos (Montoya, M. citado por Ríos, J. “De la autoría mediata en general y de si en Chile su inexpresividad legal constituye una laguna de punibilidad”. Polít. crim. nº 2. A4, página 1-23).

En razón de tal carácter, es que el acusado podría no haber dado directamente a él o los agentes ejecutores la orden de detener y matar a nadie en particular, dejando la determinación de a quién y cuándo hacerlo, así como por qué miembro de la comisión formada al efecto, al jefe asignado a ésta. De esta suerte, el concreto ejecutor de la detención y muerte de las víctimas deviene en irrelevante para el autor mediato, pues aquél no es más que una pieza fungible de este aparato organizativo, en el cual ante la negativa u oposición de un funcionario policial para ejecutar el delito, puede ser sustituido fácilmente por alguno de los tantos otros que integraban la unidad, circunstancia que demuestra el dominio del hecho que posee el autor mediato, en este caso, el Director de la Central Nacional de Informaciones;

**10º)** Que, también resulta relevante a fin de determinar la responsabilidad del acusado, el propio reconocimiento de éste respecto a la obligación de los subalternos de informarle todas las operaciones realizadas y el conocimiento que tuvo de los hechos investigados en la presente causa, corroborado con las declaraciones de agentes de la Central Nacional de Informaciones que señalan que estos deberes de dar cuenta del resultado de las operaciones se hacían continuamente, así como que el encartado tuvo conocimiento de las circunstancias del operativo que culminó con la muerte de Guillermo Rodríguez Solís;



11º) Que conforme a lo que se viene razonando, no cabe sino concluir que el acusado debe ser sancionado a título de autor mediato del homicidio simple de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, al haber incurrido la sentencia impugnada en el yerro descrito, al absolver al encartado de ese ilícito.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito y de las disidencias, sus autores.

Rol N° 29.870-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Sr. Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S. y Sra. María Teresa Letelier R. No firman los Ministros Sres. Brito y Dahm, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber ambos cesado en sus funciones.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 23/02/2024 13:30:40

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA  
MINISTRO  
Fecha: 23/02/2024 13:30:41

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 23/02/2024 13:30:41



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

MARCELO DOERING CARRASCO  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/02/2024 13:56:05

En Santiago, a veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

MARCELO DOERING CARRASCO  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/02/2024 13:56:06



Santiago, veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento de lo prescrito en los artículos 544 del Código de Enjuiciamiento Criminal y 785 del Código de Procedimiento Civil, y lo ordenado por la decisión precedente, se dicta el siguiente fallo de reemplazo del que se ha anulado en estos antecedentes.

**VISTOS:**

Del fallo de primera instancia se suprimen los motivos décimo séptimo, trigésimo primero, cuadragésimo tercero, cuadragésimo quinto y quincuagésimo segundo, así como el párrafo final del basamento trigésimo quinto; se sustituyen en el párrafo segundo del basamento vigésimo tercero la palabra “asesinarle” por la expresión “darle muerte” y en el párrafo primero del considerando cuadragésimo primero la palabra “calificado”, por el vocablo “simple”; se elimina en este párrafo la frase “y la de Humberto Leiva Gutiérrez que fuere acusado en calidad de encubridor”; se sustituye en el considerando cuadragésimo segundo la palabra “calificado” por el término “simple”; se suprime en el primer párrafo del motivo cuadragésimo cuarto la frase “de homicidio calificado a homicidio simple, conforme se señalara en el motivo séptimo”.

Se reproduce el fallo casado con las siguientes modificaciones: en el párrafo séptimo del considerando vigésimo séptimo se sustituye el término “calificado” por el de “simple”.

Asimismo, de la decisión de casación que antecede, se dan por reiteradas las reflexiones efectuadas en los motivos décimo, décimo primero y vigésimo séptimo.

**Y teniendo en su lugar y además presente:**

**Primero:** Que, los hechos descritos en el motivo décimo sexto del juez a quo, al no concurrir la calificante de alevosía, por no haberse acreditado que los agentes estatales hayan obrado sobre seguro, al establecerse que la





patrulla de la Central Nacional de Informaciones tuvo un encuentro con la víctima, efectuándose disparos, resultando uno de sus integrantes, José Cruz Lorente, herido por disparos de bala, motivo por el cual tanto él y su compañero efectúan seis disparos a Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, quien resulta con varias heridas que le provocan su muerte, debe ser calificado como homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal.

**Segundo:** Que la pena aplicable al delito de homicidio simple, consagrada en el artículo 391 N°2 del Código Penal -vigente a la época de ocurrencia de los hechos-, era la de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.

**Tercero:** Que a todos los acusados le favorece la circunstancia atenuante de irreproachable conducta anterior contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, sin que les perjudique agravantes.

Por estas consideraciones, y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 528 del Código de Procedimiento Penal; 178, 180 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se declara respecto de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Mario Carroza Espinoza, lo siguiente:

**I.-** Que **se revoca** la aludida sentencia en cuanto por ella se condenó a Humberto Leiva Gutiérrez como encubridor del delito de homicidio calificado de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís y en su lugar se decide que éste queda absuelto del referido cargo.

**II.-** Que **se confirma**, en lo demás apelado, el citado pronunciamiento, con declaración que José Patricio Cruz Lorente y Hugo César Acevedo Godoy quedan sancionados a la pena corporal de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más



el pago de las costas, en calidad de autores del delito de homicidio simple de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, sanción corporal de cumplimiento efectivo, en cuanto no se reúnen a su respecto los requisitos exigidos por la Ley N° 18.216 para el otorgamiento de penas sustitutivas.

**III.- Que se confirma** en lo demás el fallo apelado.

Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

**Acordada con los votos en contra de los Ministros señores Brito y Llanos**, quienes en consideración a lo expuesto en su disidencia del fallo de casación, estuvieron por acoger la demanda civil deducida por Luis Anselmo, Lastenía del Carmen, Manuel Tercero y Ernestina Lidia, todos de apellidos Rodríguez Solís en contra de la sentencia respecto a la reparación consistente en la inserción en un diario de la ciudad de Santiago de las partes esenciales de la sección penal del fallo.

**Acordada con los votos en contra de los Ministros señores Brito y Llanos**, quienes teniendo presente lo señalado en su disidencia del fallo de casación, fueron de la opinión de condenar al acusado Humberto Leiva Gutiérrez como autor mediato del homicidio simple de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís, imponiéndole una pena de cinco años y un día de presidio menor en su grado mínimo y las accesorias legales.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Brito.

N° 29.870-2021

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Sr. Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S. y Sra. María Teresa Letelier R. No firman los Ministros Sres. Brito y Dahm, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber ambos cesado en sus funciones.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA  
REBOLLEDO  
MINISTRO  
Fecha: 23/02/2024 13:30:42

LEOPOLDO ANDRES LLANOS  
SAGRISTA  
MINISTRO  
Fecha: 23/02/2024 13:30:43

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER  
RAMIREZ  
MINISTRA  
Fecha: 23/02/2024 13:30:43



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

MARCELO DOERING CARRASCO  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/02/2024 13:56:07

En Santiago, a veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

MARCELO DOERING CARRASCO  
MINISTRO DE FE  
Fecha: 23/02/2024 13:56:08

